S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 23

O R D I N A R I A

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos del lunes veintisiete de febrero de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTAS

Proyecto de acta de la sesión pública dos, Solemne Conjunta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de la sesión pública veintidós, ordinaria, ambas celebradas el martes veintiuno de febrero de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes veintisiete de febrero de dos mil doce:

II. 1. 240/2011

Amparo en revisión 240/2011 promovido por ***** , contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes, entre otros, en el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propone: *“PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** , en contra de la resolución pronunciada el uno de septiembre de dos mil ocho, por el Secretario de Comunicaciones y Transportes”*.

La señora Ministra Luna Ramos sometió al Pleno si se encuentra incurso en causa de impedimento para conocer de los amparos en revisión relacionados con el tema de interconexión, en virtud de que el licenciado ***** , quien es su compadre, trabaja en ***** , indicando haber puesto esto a consideración de los señores Ministros en los asuntos donde se analizó la procedencia de la suspensión en los juicios de amparo relacionados con la misma temática, a propósito de algunas notas periodísticas.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que, al igual que en los precedentes referidos, la señora Ministra Luna Ramos no está incurso en causa de impedimento para conocer de los asuntos listados, en tanto que la persona a que se refiere no interviene directamente en ellos, ni tiene vinculación, con lo que se manifestaron de acuerdo los señores Ministros Cossío Díaz y Aguilar Morales.

Por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza, se determinó que la señora Ministra Luna Ramos no está incurso en causa de impedimento para conocer de los amparos en revisión 240/2011, 426/2010, 190/2011, 318/2011 y 644/2011.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sometió al Pleno si se encuentra incurso en la causa de impedimento prevista en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue autorizado de algunas de las partes en los amparos en revisión 426/2010, 190/2011 y 318/2011, indicando que la causal referida trasciende a los diversos 240/2011 y 644/2011, en atención a que en todos ellos se aborda una problemática similar.

El señor Ministro Franco González Salas estimó que el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sí está incurso en la causa de impedimento referida, considerando que manifestó

claramente encontrarse en ella y que dio razones suficientes para justificarlo.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que dicho señor Ministro se encuentra impedido para conocer de los amparos en revisión listados, en tanto que fungió como autorizado en algunos de ellos, siendo que éstos se encuentran vinculados por los temas que abordan.

Por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza, se determinó que el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se encuentra incurso en la causa de impedimento prevista en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, para conocer de los amparos en revisión 240/2011, 426/2010, 190/2011, 318/2011 y 644/2011.

Tomando en cuenta esta determinación, el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se retiró del salón de sesiones del Pleno.

El señor Ministro Valls Hernández hizo la presentación de su proyecto, indicando que en la materia de la revisión, se propone revocar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, con base en que el Secretario de Comunicaciones y Transportes es competente para resolver el recurso administrativo de revisión interpuesto contra el

acuerdo número P/300507/304, emitido por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y para resolver sobre condiciones no convenidas por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno los considerandos del primero al quinto, relativos, respectivamente, a la competencia, la oportunidad y la legitimación, las resoluciones tanto del Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región como del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y a los agravios de las partes, los que se aprobaron por unanimidad de diez votos.

Enseguida, sometió al Pleno el considerando quinto en cuanto propone declarar infundado el primero de los agravios de la quejosa *****, en el que insiste en hacer valer que el Secretario de Comunicaciones y Transportes carece de competencia para resolver el recurso administrativo de revisión interpuesto contra el acuerdo número P/300507/304, emitido por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones el treinta de mayo de dos mil siete, y declarar fundados los argumentos expresados por la tercero perjudicada *****, y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, encaminados a demostrar que, contrario a lo que determinó el Juzgado de Distrito, dicho Secretario sí tiene competencia para conocer del recurso de revisión de que se trata, y para resolver sobre

condiciones no convenidas por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

El señor Ministro ponente Valls Hernández indicó que lo anterior se propone así, considerando que no es dable entender que la autonomía referida en el artículo 9-A, párrafo primero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, implica necesariamente que al ejercer la Comisión Federal de Telecomunicaciones las facultades directas, contenidas en dicho precepto, no tenga dependencia alguna en relación con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de titular del ramo, pues dicha disposición pone especial énfasis en que la Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por tanto, que en realidad no se le confirió autonomía orgánica y financiera independiente, es decir, que no se desligó ni destruyó la relación jerárquica que une a dichos entes, por lo que dicha Comisión sigue sujeta al régimen de jerarquía y a los poderes de nombramiento, mando, decisión, vigilancia, disciplinario y poder de dirimir competencias que implican esa relación, de ahí que dicha autonomía se concreta en que la referida Comisión, previo el desarrollo del procedimiento respectivo, con total independencia y libertad, emita la resolución conducente, lo que no significa que los particulares que se consideren afectados por sus actos estén imposibilitados para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a partir de lo cual

la Secretaría reasumiría sus atribuciones originarias y procedería a resolver lo conducente.

Agregó que la facultad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para determinar las condiciones que en materia de interconexión no hayan podido convenirse entre los concesionarios, prevista en la fracción X del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, carece del atributo de exclusividad con el que sí cuentan las facultades en materia de radiodifusión, previstas en la fracción XVI del propio numeral, lo que permite concluir que el Secretario de Comunicaciones y Transportes tiene facultades para revisar las resoluciones que dicha Comisión dicte en ejercicio de la primera atribución señalada, lo que se corrobora con lo establecido por el Tribunal Pleno en las jurisprudencias P/J. 89/10, P/J. 96/10 y P/J. 98/10, derivadas de la controversia constitucional 7/2009.

De esta manera, indicó que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, al decidir el recurso de revisión correspondiente, tiene el dominio pleno del acto y, por tanto, puede revocarlo, reformarlo o sustituirlo por razón de juridicidad o de mera oportunidad, pudiendo incluso actuar de oficio, de ahí que esté facultado para establecer las condiciones que no hayan podido convenirse entre los concesionarios, dentro de las cuales se entienden las tarifas.

Finalmente, señaló que se propone estimar innecesario el estudio de los argumentos vertidos en los segundos

puntos de agravio hechos valer por las partes, orientados a demostrar que la sentencia recurrida resulta incongruente, toda vez que dicha incongruencia queda superada al determinarse que el Secretario de Comunicaciones y Transportes es competente para conocer del recurso administrativo de revisión referido.

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó estar en contra del proyecto. Consideró que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es la autoridad competente para conocer del recurso administrativo de revisión en comento, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que en términos de lo resuelto por el Pleno en la controversia constitucional 7/2009, la Comisión Federal de Comunicaciones cuenta con autonomía plena para dictar sus resoluciones, y en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ésta puede ser controlada por el pleno de la propia Comisión, que es la suprema autoridad de decisión en el ámbito de competencia de la Comisión, estimándose, por tanto, como la autoridad jerárquica superior del órgano especializado.

Agregó, finalmente, que las implicaciones de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no derivan únicamente del hecho de que sea un órgano desconcentrado, sino de los efectos y las

consecuencias que estableció el legislador tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El señor Ministro Aguilar Morales también manifestó estar en contra del proyecto, estimando que debe reconocerse una nueva forma evolucionada de desconcentración en la que aun cuando el órgano desconcentrado dependa económica y organizativamente del titular del ramo, no sea dependiente en cuanto a la toma de determinaciones que por disposición de la ley deberán hacerse de forma autónoma y definitiva. Señaló que cuando existe delegación de facultades del superior jerárquico hacia sus subordinados, aquél no pierde dichas facultades y, en consecuencia, las resoluciones de los delegados en ejercicio de ellas pueden revisarse por el superior, ya sea oficiosamente o a petición de parte, indicando que no se verifica dicha figura cuando las facultades se trasladan de una instancia a otra por virtud de la ley, tomando en cuenta las cualidades especializadas del inferior jerárquico en la materia.

Indicó que, por ende, cuando existe una redirección de facultades por virtud de la ley, el funcionario superior no puede revisar las determinaciones del órgano especializado en ejercicio de dichas facultades, pues ellas se toman sin sometimiento alguno del superior jerárquico, es decir, con autonomía plena, lo que se corrobora con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal. Señaló que con lo anterior se propicia una mayor independencia del área administrativa que le corresponda a los órganos especializados, y se fortalece la institución, asegurando mejores condiciones en la prestación de servicios y en la regulación de las actividades.

En este sentido, consideró que la Ley Federal de Telecomunicaciones tiene como propósito dotar a la Comisión Federal relativa de todas las facultades que correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones, indicando que ello no constituye una delegación de facultades, sino el traslado legislativo de éstas, a fin de evitar el “fenómeno de la doble ventanilla”, en la que dos autoridades son las que intervienen para tomar una misma decisión.

Por otra parte, estimó que el hecho de que de acuerdo con las tesis de jurisprudencia P/J. 89/2010, P/J. 96/2010 y P/J. 98/2010 el Pleno haya considerado que tratándose de las facultades previstas en el artículo 9-A, fracción XVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Comisión relativa no guarda dependencia y subordinación jerárquica con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, ello no significa que sus otras facultades decisorias, no examinadas con motivo de la controversia constitucional 7/2009, no lo sean.

Citó lo expresado por los señores Ministros Góngora Pimentel, Ortiz Mayagoitia y Cossío Díaz en la sesión pública de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, al analizarse la facultad del Secretario de Comunicaciones y Transportes para revisar las decisiones de los órganos desconcentrados prevista en el artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría, precisando que en esa sesión se determinó que dicho precepto no es aplicable a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Indicó que Suprema Corte ya consideró que no es extraño que un órgano desconcentrado tenga facultades cuyo ejercicio no es revisable ni atribuible al titular de la Secretaría correspondiente, a pesar de que el texto mismo de las disposiciones aplicables no les otorgue el carácter de exclusivas, pues así deben entenderse a partir del estudio sistemático de las normas que le atribuyen dichas facultades, agregando que esto se advierte de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003 y 2a./J. 75/2003, donde se estableció que el examen sistemático de las disposiciones legales relativas pone de manifiesto que el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominado Servicio de Administración Tributaria, tiene el carácter de autoridad fiscal y está encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios.

Señaló que lo mismo puede decirse de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en tanto que del análisis sistemático de los artículos 2, 9-A, 41, 42, 43 y demás relativos, de la Ley Federal de la materia, se llega a la conclusión de que sus facultades decisorias son exclusivas y especiales, sin la intervención previa ni posterior del Secretario del ramo, indicando que el hecho de que el legislador sólo utilizara la expresión “facultad exclusiva” en la fracción XVI del artículo 9-A de dicha ley no significa que las facultades decisorias de la Comisión, previstas en otras fracciones, no tengan la misma característica, en tanto que el propio acápite de dicho precepto deja en claro que las determinaciones o resoluciones de dicho órgano se dictan con autonomía plena, en la medida en que es el especial y específico órgano encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, siendo contradictorio, por ende, que las resoluciones de la Comisión en materia de interconexión se consideren como emitidas en una etapa preliminar de la decisión debido a la posibilidad de que puedan ser revisadas y, con ello, modificadas y aun revocadas, por un funcionario sin competencia técnica en la materia y cuyas atribuciones perdió, no en ejercicio de una facultad de delegación, sino de una privación por disposición del legislador.

En esta medida, destacó la necesidad de que exista seguridad y expeditéz en la toma de decisiones tratándose

de materias tan técnicas y evolucionantes, cuya retardada y, quizá, política aprobación afectaría el desarrollo tecnológico del país, y terminaría por afectar la economía del usuario final, cuya protección se busca en la ley. Indicó que, por ello, el legislador otorgó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones todas aquéllas atribuciones concernientes a regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y, específicamente, la de determinar las tarifas de interconexión no acordadas por las empresas autorizadas, destacando que a nivel internacional la tendencia ha sido la de encomendar la protección del interés público de las telecomunicaciones a una autoridad reguladora independiente, que establezca las reglas claras y prontas para la explotación de las telecomunicaciones por empresas, ya sea públicas, privadas o mixtas.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó no compartir la propuesta del proyecto. Después de citar las consideraciones vertidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en relación con las ventajas de aumentar el grado de independencia de los órganos reguladores en la materia con respecto al gobierno, indicó que el legislador dotó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de autonomía para dictar sus resoluciones, incluso en relación con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, excepto en los casos en que la propia ley establece expresamente su

intervención, de ahí que en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Pleno de la citada Comisión es la autoridad suprema de decisión en el ámbito de su competencia y, por ende, puede ser considerada como la autoridad jerárquica superior.

En estos términos, estimó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede, a través del recurso de revisión, modificar las decisiones adoptadas por dicha Comisión, máxime que para garantizar la efectividad de su desempeño y sus determinaciones el legislador estableció que aquélla se integrará por cinco comisionados, quienes deben acreditar haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector de telecomunicaciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 9-C de la Ley.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó estar a favor del proyecto, estimando que al resolverse la controversia constitucional 7/2009, se determinó que las facultades previstas en la fracción XVI del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones son las únicas que el legislador reservó de manera exclusiva a la Comisión Federal mencionada, y que el hecho de establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de competencia para revisar las determinaciones que dicha

Comisión emita en ejercicio de las demás facultades implica suplantar al legislador vía interpretación.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó no compartir el proyecto. Indicó que no puede radicalizarse el hecho de que los órganos desconcentrados, al pertenecer a la administración pública centralizada, mantengan una serie de vínculos con la Secretaría de la cual se desprenden las facultades que se le otorgan, y con respecto al Presidente de la República, lo que se corrobora con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Tomando en cuenta que la creación de los órganos desconcentrados busca que exista mayor eficiencia en la administración pública y que la autonomía de dichos órganos se refleja con mayor o menor intensidad, de acuerdo con las funciones que tienen otorgadas cada uno de dichos órganos, indicó que en lo que se confiere de manera exclusiva a la Comisión Federal relativa, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, no pueden intervenir otras autoridades, pues de lo contrario se vulneraría la autonomía que le otorgó el legislador y que le fue reconocida por el Pleno al resolver la controversia constitucional 7/2009.

Consideró que el recurso de revisión administrativo no procede contra las determinaciones dictadas por la Comisión en ejercicio de dichas atribuciones, manifestando dudas respecto de que el Pleno de aquélla sea competente para conocer de dicho recurso en esos casos, al no reconocerse

una facultad expresa en ese sentido y no darse el supuesto exacto previsto en el artículo 86 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues éste se refiere a los casos en que el acto impugnado provenga del titular de una “dependencia”, es decir, de ciertos órganos que dependen directamente del Presidente de la República, como las Secretarías de Estado.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las trece horas, y reanudó la sesión a las trece horas con quince minutos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo manifestó estar en contra del proyecto, indicando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene competencia para conocer del recurso de revisión en contra de la determinación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de tarifas de interconexión.

Destacó que existe una aparente incongruencia en que a un órgano desconcentrado se le otorgue autonomía plena para el ejercicio de sus atribuciones, advirtiendo una creciente tendencia a la creación de órganos técnicos con una función de regulación sobre actividades económicas trascendentes para el país que busca otorgar un mejor servicio a la sociedad, privilegiando la especialidad del órgano al no someterlo a un superior jerárquico que pueda modificar o revocar sus determinaciones, y propiciando que se obtengan decisiones rápidas en las controversias, en

tanto que la dilación o demora en la resolución de este tipo de conflictos tiene consecuencias negativas tanto para los concesionarios como para los usuarios de servicios.

Señaló no compartir la interpretación en el sentido de que la fracción XVI del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones se refiere a las únicas atribuciones que la Comisión Federal de Telecomunicaciones puede ejercer con autonomía plena, considerando que cuenta con dicho atributo para el ejercicio de todas sus atribuciones, en tanto que dicho precepto no distingue entre la forma que dicha Comisión debe ejercer sus facultades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En este sentido, consideró que no resulta lógico establecer que dicho organismo cuenta con autonomía plena para dictar sus resoluciones y determinar, al mismo tiempo, que debe revisarse cada una de las fracciones del artículo 9-A de la ley en comento para dilucidar cuáles puede ejercer con plena autonomía y cuáles no.

Indicó que de sostenerse que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede modificar o revocar las determinaciones de la Comisión en comento, ello haría nugatorio el ejercicio de sus facultades, estimando que el vocablo “de manera exclusiva” contenido en la fracción XVI del artículo 9-A citado implica que no se reservó ninguna facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la materia a la que alude, y que todas las atribuciones

contenidas en el resto de las fracciones son propias de la Comisión citada y las ejerce de manera plena.

Finalmente, indicó que no podría sostenerse que en contra de las determinaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no exista medio de defensa, pues procede el juicio de amparo, indicando que, de abrirse la puerta a la procedencia de la revisión ante el superior jerárquico, se desnaturalizaría la esencia y la finalidad de dicha Comisión.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia indicó que estaría en contra del proyecto, estimando que el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que la Comisión mencionada goza de plena autonomía para dictar sus resoluciones; que el artículo cuarto transitorio del decreto de reformas a dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de abril de dos mil seis, establece que las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto, se hacen en las leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9-A de esta ley, en lo futuro se entenderán hechas a la Comisión, y que en el Reglamento respectivo se asienta que el Pleno de ésta es su órgano supremo, indicando que no ignora que en materia de telecomunicaciones existen actos en los que colabora el Secretario del ramo.

Señaló que si la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite un acto investida de plena autonomía resulta inconsecuente que a través de un recurso en sede administrativa el Secretario del ramo, en su carácter de superior jerárquico, se haga de todas las atribuciones que se le concedieron por razones de especialidad y con una protección destinada al buen ejercicio de sus atribuciones.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó estar a favor del proyecto, tomando en cuenta que si bien la Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano con autonomía desde su creación y que ha evolucionado ganando más de dicha cualidad, lo cierto es que no ha cambiado su estructura como órgano desconcentrado, que de no tener dependencia jerárquica se le denominaría organismo constitucional autónomo o descentralizado. Indicó que si bien lo ideal es evitar la “doble ventanilla”, lo cierto es que la ley establece una situación distinta.

Señaló que el hecho de que la Comisión relativa cuente con autonomía plena para dictar sus resoluciones no implica que éstas no puedan ser revisadas por su superior jerárquico, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es el Secretario de Comunicaciones y Transportes, debiendo distinguirse entre las facultades de la autoridad, que se ejercen de manera específica y sin consulta de nadie, y la procedencia de los recursos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó estar a favor de la propuesta del proyecto en lo esencial, con independencia de que la Comisión relativa cuente con autonomía o no, pues precisamente está a discusión el alcance legal y constitucional de dicho atributo.

Indicó que no debe perderse de vista que las telecomunicaciones constituyen un área prioritaria, estratégica y de política pública fundamental para el Estado Mexicano, lo que está orientado por los principios fundamentales de no discriminación, equidad e igualdad entre partes, que rebasan los conceptos meramente comerciales o mercantiles.

Para sustentar el sentido de su voto recurrió a los precedentes, citando que en la acción de inconstitucionalidad 26/2006 el Pleno precisó que las facultades atribuidas a la Comisión, salvo las relativas a radio y televisión, corresponden originalmente al Secretario del ramo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que en la controversia constitucional 7/2009, el Pleno estableció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe ser considerada como el superior jerárquico de la Comisión, quien se encuentra subordinada en todo salvo por lo que hace a la materia de radio y televisión que corresponde a su competencia exclusiva, y que la Secretaría mencionada es competente para revisar los recursos de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión,

conforme al artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El señor Ministro Valls Hernández sustentó que la desconcentración no es una forma de organización administrativa, sino una técnica de distribución de facultades, indicando que el Legislador es el único que tiene competencia para conceder facultades exclusivas a los órganos desconcentrados. Agregó que esta figura no implica la desaparición de la relación jerárquica entre el órgano desconcentrado y el titular del ramo, sino sólo la atenuación de la relación jerárquica en los términos que establezca la ley, por lo que la autonomía técnica que se otorga a dichos organismos no se traduce en que su superior jerárquico esté imposibilitado para revisar las determinaciones que toma en ejercicio de sus facultades no exclusivas, de aquellas compartidas por el superior jerárquico, o de las que se le excluye expresamente.

Señaló que la desconcentración puede conceder autoridad propia y exclusiva, pero solamente si lo establece la ley, indicando coincidir con la señora Ministra Luna Ramos en que si bien lo deseable es que todos los órganos especializados fueran total y absolutamente autónomos, lo cierto es que la ley no los establece así.

Sometida a votación la propuesta del proyecto consistente en que el Secretario de Comunicaciones y Transportes tiene competencia para resolver el recurso

administrativo de revisión interpuesto contra el acuerdo número P/300507/304, emitido por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones el treinta de mayo de dos mil siete, votaron en contra los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas y Ortiz Mayagoitia. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Valls Hernández y Presidente Silva Meza votaron a favor.

El señor Ministro Aguilar Morales ofreció realizar el engrose del asunto, lo que fue aceptado unánimemente por los señores Ministros.

En consecuencia, el asunto se falló conforme a los siguientes puntos resolutivos, que se aprobaron por unanimidad de once votos en los siguientes términos:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.

*SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** , en contra de la resolución pronunciada el uno de septiembre de dos mil ocho por el Secretario de Comunicaciones y Transportes.*

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Los señores Ministros Valls Hernández, Luna Ramos y Presidente Silva Meza reservaron su derecho para formular

Sesión Pública Núm. 23

Lunes 27 de febrero de 2012

sendos votos particulares, y los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Sánchez Cordero de García Villegas y Ortiz Mayagoitia, para formular, en su caso, voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el martes veintiocho de febrero del año en curso, a partir de las once horas y levantó esta sesión a las catorce horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.